

1-4 NACIÓN

POLÍTICOS QUE QUIEREN SACAR DEL CAMINO A OTROS Y FARC, ORIGEN DE AGRESIONES HOY

Gobierno admite que 25% de los pueblos tiene riesgo para elecciones

De la Costa Caribe y el suroriente del país son principalmente los municipios vulnerables por la violencia, según el Ministro de Defensa. El 7 por ciento está en riesgo de fraudes. En Magdalena y Antioquia, las nuevas intimidaciones.

VICENTE ARCIERI G.
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CARTAGENA

Al 'juego sucio' de la política y a la orden de la cúpula de las Farc de sabotear las elecciones de octubre, atribuyó el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el aumento, en tres casos, de la violencia contra candidatos y precandidatos, con respecto a la campaña del 2003.

El Ministro habló ayer sobre seguridad electoral en el seminario 'Medios, cobertura de las elecciones y fortalecimiento de la democracia en Colombia', al que asisten directores de distintos medios de comunicación del país.

Santos dijo que hace cuatro años hubo agresiones contra 15 precandidatos y que en lo que va de esta campaña se han dado 18.

Explicó que, de acuerdo con la información que ha recibido, candidatos contratan a bandas criminales para agredir y "sacar del ring" a sus contendores.

La otra razón, que según dijo se obtuvo por labores de inteligencia, indica que el jefe máximo de las Farc, 'Manuel Marulanda', ordenó a sus hombres sabotear las elecciones y que se sabe de nueve frentes de este grupo guerrillero que están trabajando en ese propósito.

El Ministro reconoce que las elecciones en el 25 por ciento de los municipios están en alto riesgo por razones de orden público, y que en este porcentaje entran zonas de la Costa Caribe y del suroriente del país, principalmente.

Otro 7 por ciento de los municipios presentan alto riesgo electoral (fraudes y otros delitos contra el sufragio).

Este último dato fue controvertido por la Misión de Observación Electoral. Según Claudia López, que presentó los resultados del análisis de la Misión, el 30 por ciento de los municipios del país (unos 328) se encuentran en alto riesgo electoral.

De hecho, el procurador General, Edgardo Maya, dijo ayer que con el actual sistema es imposible garantizar unas elecciones transparentes, pues se presenta fraude en el registro, en los escrutinios y además se presiona a los votantes.

Menos actos terroristas

Según el ministro Santos, en cuanto a actos terroristas frente al proceso electoral pasado, se presenta una disminución del 48 al 45 por ciento.

Aseguró que hasta ahora tampoco hay evidencias ni denuncias concretas sobre interferencias como las que hicieron los paramilitares para las votaciones del 2003.

FARC SE LLEVARON A CANDIDATO DE ANORÍ



La tranquilidad con la que se venía desarrollando el debate electoral en Antioquia se vio interrumpida por el secuestro del candidato a la alcaldía de Anorí, Pedro Pablo Agudelo Echeverri, de 44 años.

El aspirante por Cambio Radical fue secuestrado por el frente 36 de las Farc cuando presidía una concentración política en la vereda La Meseta, distante cuatro horas del casco urbano de esta población del nordeste del Departamento. Agudelo ha sido alcalde en dos oportunidades y fue jefe de la campaña del presidente Álvaro Uribe Vélez en esa localidad en las pasadas elecciones.



El ministro Santos en el seminario de ayer en Cartagena, en medio del director de la Fundación Konrad Adenauer, Carsten Wieland (izq.), y del representante del PNUD, Bruno Moro.

"No conocemos la primera amenaza en ese sentido... No se sabe de reuniones con candidatos o personas para obligarlas a votar por fulano o sustano, so pena de morir", dijo.

Agregó que las bandas criminales que han formado algunos desmovilizados están dedicadas al narcotráfico, pero que no descarta que en casos aislados traten de interferir en la elección de un mandatario local o regional para facilitar sus negocios ilícitos.

De hecho, sostuvo que las muertes violentas de las últimas semanas en Santa Marta y Barranquilla obedecen a una guerra entre bandas de narcos.

Anónimos exigen renuncia a candidato de Magdalena

SANTA MARTA

A la violencia que vive la capital de Magdalena, a donde se trasladó el enfrentamiento entre ex 'paras' y 'paras disidentes' del proceso de paz, por el control del espacio que dejó el ex jefe del 'Bloque Resistencia Tairona', Hernán Giraldo, se suman ya amenazas que pretenden afectar las elecciones regionales de octubre.

Hace unos días, el candidato liberal a la Gobernación del Magdalena Omar Díazgranados denunció ante la Fiscalía que recibió varios anóni-

mos en los que le piden que se retire de la campaña, al tiempo que amenazan de muerte a miembros de su familia si no cumple lo solicitado.

"No sé de dónde vienen, pero está claro que lo que buscan es atajar la fuerza del movimiento (liberal)", subrayó Díazgranados, quien ha reforzado su seguridad y suspendido algunas giras por municipios y veredas.

29 muertos solo en julio

La guerra en Santa Marta entre las autodenominadas 'Águilas negras', grupo surgi-

do tras la desmovilización 'para', y la banda de los mellizos Mejía Múnera, que se desmovilizaron pero no atendieron el llamado del Gobierno para ir a un sitio de reclusión, se ha manifestado en balacaras en sitios públicos y en atentados desde motociclistas.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en julio fueron asesinadas 29 personas en la capital, 12 más que en el mismo mes del 2006.

El fin de semana pasado, en pleno aniversario 482 de Santa Marta, murieron asesina-

Los más vulnerables

Los concejales y alcaldes se han convertido en los líderes políticos más vulnerables.

En lo que va del 2007 han sido asesinados ocho concejales y tres familiares suyos en Campoalegre (Huila), San Vicente del Caguán y El Doncello (Cauca), Nechí (Antioquia), Arauquita (Arauca) y El Tambo (Cauca).

La Federación Nacional de Concejales asegura que, por amenazas, hay 2.000 cabildantes por fuera de sus municipios.

La gran mayoría proviene de las Farc, pero también hay del Eln y los paramilitares.

Sobre alcaldes, la Federación de Municipios registra 39 peticiones de protección.

El Ministerio de Defensa asegura que hoy día solo tres alcaldes deben despachar por fuera de sus municipios por amenazas, cuando antes de las elecciones del 2003 eran 236. Dice que la incidencia de los 'paras' hoy en las amenazas es de un 27%.

Este año fue asesinada la Alcaldesa de San José del Palmar (Chocó).

CABALLERO SE MUEVE POR CIUDADES ALEMANAS; ARANA SIGUE EN EL PAÍS

El rastro de los prófugos de la 'parapolítica'

REDACCIÓN JUSTICIA

Al menos tres informes desde Alemania han llegado al DAS sobre los movimientos del ex congresista Jorge Luis Caballero, uno de los prófugos de la 'parapolítica'.

Fuentes del DAS le dijeron a EL TIEMPO que la Interpol en ese país les confirmó que, tras un paso inicial por España, el ex congresista entró a ese territorio.

"Se mueve, principalmente, entre Berlín y Frankfurt. Sabemos qué hace y con quién se reúne, pero no lo pueden detener y entregar, a pesar de que está en una circular roja", asegura una fuente.

¿La razón? Caballero, señalado por supuestos acuerdos con los paramilitares, tiene ciudadanía alemana.



Saben que Caballero se mueve entre tres ciudades, qué hace y con quién se la pasa, pero no lo pueden detener y entregar".

Fuente del DAS sobre el paradero de Jorge Luis Caballero.

Las autoridades de ese país argumentan, según la Interpol, que él adquirió la nacionalidad al casarse con una de sus ciudadanas y que su legislación prohíbe enviar a un alemán a otro país en calidad de reo. "Sabemos exactamente dónde está en Alemania con su mujer, hija de un diplomático", contó la fuente.

La vía que intenta Colombia para que Caballero responda ante la justicia es la deportación. Ya se están haciendo las gestiones diplomáticas al

respecto, pero hasta ahora no se conoce una respuesta oficial del Ministerio de Exteriores de ese país europeo.

Búsqueda en Venezuela

Otros dos que están huyendo tras el escándalo por la infiltración 'para' son el ex ministro Álvaro Araújo Noguera y el ex gobernador de Sucre Salvador Arana Sus.

Respecto a Araújo Noguera, padre de Álvaro Araújo Castro -ex congresista también detenido por la 'parapoli-



Álvaro Araújo Noguera, ex ministro de Estado.



Jorge Luis Caballero, prófugo de la justicia.



Salvador Arana Sus, ex gobernador de Sucre.

tica", lo único de lo que tienen certeza los investigadores de la Policía y el DAS es que permanece en Venezuela.

Hace un mes, Araújo padre se presentó ante el cónsul en Barquisimeto, Elías Ochoa Daza, y le pidió un certificado de supervivencia. El incidente le costó el puesto al diplomático, pues no lo denunció a

pesar de que su testimonio fue clave en la investigación que tiene huyendo al político del Cesar. Desde ese momento, las autoridades colombianas les pidieron a sus homólogos de Venezuela que rastrearan en la zona al ex ministro.

El seguimiento de Araújo Noguera, vinculado a una investigación por el secuestro de un político en el Cesar, se ha trasladado a Caracas y al estado del Zulia, donde, dicen fuentes policiales, él tiene algunas propiedades.

"De allá no ha salido. Las autoridades venezolanas han demostrado su colaboración y estamos seguros de que si lo detienen lo deportarán inmediatamente", contó un detective del DAS.

De Salvador Arana, procesado por el asesinato del alcalde Eudaldo Díaz y la creación de los grupos 'paras' en Sucre, la Policía está segura de que no ha podido salir de Colombia. Lo ubican en un paraje rural entre Sucre y Córdoba.

"Algunas fuentes aseguran que está protegido por bandas criminales. Sin embargo esa información no la hemos corroborado aún", puntualizó un alto oficial de la Policía.

Y del ex representante Jorge Luis Feris Chadid, uno de los firmantes de Ralito, se sabe que está internado en zona rural de Sucre.

PARTIDOS ESTUDIAN PROPUESTA DEL GOBIERNO Y DEL JEFE DEL MINISTERIO PÚBLICO

A la oposición le gustó más la idea del Procurador

REDACCIÓN POLÍTICA

La propuesta del procurador Edgardo Maya de ofrecer una nueva salida jurídica para destrabar el proceso de paz con los paramilitares, diferente a la carta del Gobierno de revivir la sedición, tuvo buen recibo en el Congreso, pero los partidos prefieren hacer un debate de fondo para anunciar si la respaldan o no.

La iniciativa de Maya, revelada ayer por EL TIEMPO, consiste en suspender la aplicación de la pena a los 'paras' desmovilizados y verificar su buen comportamiento en un plazo de tres años.

El senador Héctor Helí Rojas, vocero del Partido Liberal, anunció que tanto el pro-

yecto del Gobierno como el del Procurador serán estudiados antes de tomar una decisión.

Rojas dijo que más que convertir el concierto para delinquir en sedición, el temor del Gobierno y los 'paras' es que los desmovilizados no sean afectados con una extradición. "Si esa es la preocupación, que lo digan", dijo.

El senador Juan Fernando Cristo admitió que la idea del Procurador gustó más que la del presidente Álvaro Uribe, mientras que Carlos García, del partido de 'la U', dijo que la propuesta del Procurador "es bien intencionada, es congruente y jurídicamente válida". Pero le ve dos obstáculos:

"Si existe viabilidad jurídica para convertirla en ley" y que el proceso de verificación de una buena conducta de los 'paras' es muy difícil de aplicar en un país como Colombia.

Gustavo Petro, senador del Polo Democrático, dijo que la propuesta del Procurador es viable y es una de varias alternativas que puede aprobar el Congreso para superar el problema jurídico que tiene el proceso de desmovilización con los 'paras'.

"Me parece que el Gobierno no está preocupado con el problema jurídico, sino que está concentrado en cumplirles una promesa clandestina a las tropas y los capos del paramilitarismo", dijo Petro.

Y añadió que el riesgo de la propuesta del presidente Uribe es que puede "convertir en actor político al narcotráfico".

Claudia Rodríguez de Castellanos, vocera de Cambio Radical, dijo que apoyará el proyecto del Gobierno, pero que le adicionará dos puntos: una definición de lo que es delito político y un artículo para agilizar la ayuda que el Estado debe entregar a las víctimas.

El vocero en la Cámara del partido de 'la U', el representante Augusto Posada, se declaró a favor de tramitar en el Congreso el proyecto del Gobierno, pero aclaró que eso no implica dejar de lado la propuesta del Procurador.



Edgardo Maya, procurador General de la Nación.